



Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

17562/2013

NEUQUÉN, de abril de 2025.

### AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en causa N° FGR 17562/2013/TO1 caratulada "PETRACCA, Mariela Eva - PETRACCA, Gabriela Romina - CARUS, Agustín Juan - CARUS, Carlos Alberto - FLORES RIVAS, Álvaro Ramón y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal", en trámite por ante este Tribunal, la situación procesal de: **1) Mariela Eva PETRACCA**, DNI 27.038.444, de nacionalidad argentina, nacida el 20 de enero de 1979, domiciliada en la calle Río Negro N° 235 (Lote 1 C, Mza. 14 F) de la ciudad de Plottier; **2) Gabriela Romina PETRACCA**, DNI 31.614.694, de nacionalidad argentina, nacida el 6 de agosto de 1985, domiciliada en la calle Río Negro N° 235 (Lote 1 C, Mza. 14 F) de la ciudad de Plottier; **3) Fernando BARTOLI**, DNI 27.725.259, de nacionalidad argentina, nacido el 9 de noviembre de 1979, domiciliado en la calle Lamadrid N° 428 de la ciudad de Plottier; **4) Marta Silvia GÓMEZ**, DNI 14.761.202, de nacionalidad argentina, nacida el 4 de mayo de 1962, domiciliada en el Barrio 103 Viviendas, Casa 60, de la ciudad de Plottier; **5) Rodrigo Horacio IGEA**, DNI 25.285.801, de nacionalidad argentina, nacido el 19 de marzo de 1976, domiciliado en la calle Puerto Belgrano N° 126, de la ciudad de Cipolletti; **6) Carlos Martín FIGUEROA**, DNI 27.377.321, de nacionalidad argentina, nacido el 13 de mayo de 1979, domiciliado en la calle Primera Junta N° 3084, Barrio Los Álamos, de la ciudad de Cipolletti; **7) Guillermo Leonardo SCHEUERMANN**, DNI 23.001.693, de nacionalidad argentina,

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

nacido el 22 de febrero de 1973, domiciliado en la calle Río Litrán N° 544, de la ciudad de Aluminé; **8) Juan Agustín CARUS**, DNI 30.812.862, de nacionalidad argentina, nacido el 21 de abril de 1984, domiciliado en la calle Pilar N° 3551 de la ciudad de Neuquén; **9) Álvaro Ramón FLORES RIVAS**, DNI 93.018.473, de nacionalidad chilena, nacido el 11 de septiembre de 1965, domiciliado en el Barrio Rincón del Valle, Casa N° 6, Lote N° 3, de la ciudad de Neuquén; **10) Jorge Daniel FLORES MUÑOZ**, DNI 92.970.513, de nacionalidad chilena, domiciliado en la calle Tromen N° 420, Barrio Chacra 4, de la ciudad de San Martín de los Andes; **11) Carlos Alberto CARUS**, DNI 32.000.187, de nacionalidad argentina, nacido el 28 de diciembre de 1985, domiciliado en el Paraje China Muerta, Km 1244, Barrio 'La Dolfina', de la ciudad de Plottier; **12) Daniel Orlando PONTET**, DNI 16.052.147, de nacionalidad argentina, nacido el 20 de abril de 1962, domiciliado en la calle Buenos Aires N° 348, de la ciudad de Plottier; **13) Héctor SAIZ**, DNI 11.861.886, de nacionalidad argentina, nacido el 6 de febrero de 1958, domiciliado en la calle Tte. Ibáñez N° 1129, de la ciudad de Cipolletti; **14) Juan Antonio SEPÚLVEDA**, DNI 20.242.679, de nacionalidad argentina, nacido el 1 de octubre de 1968, domiciliado en la calle Leloir N° 1046, Barrio 120 viviendas, de la ciudad de Plottier;

#### **RESULTA:**

**I)** Que, en cuanto aquí interesa, en fecha 10 de febrero de 2022 -fs. 4439/4439-, el Ministerio Público Fiscal -representado por la Dra. Mariana Soledad QUEREJETA- solicitó la elevación a juicio de la causa. Los hechos imputados fueron descriptos -en relación a cada uno de los imputados- de la siguiente manera (Punto III):

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

Los imputados fueron requeridos a juicio por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante (ARCA), sobre una plataforma fáctica de aristas marcadamente semejantes. Los hechos imputados están detallados en sendas piezas procesales, a las que nos remitimos en honor a la brevedad.

En síntesis, los hechos descriptos en tales instrumentos consisten en que las personas imputadas habrían generado usinas (distintos imputados actuaron ante diferentes empresas) destinadas a emitir facturas apócrifas para que terceros contribuyentes evadan tributos (o disminuyan el gravamen), tales como, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o el Impuesto a las Ganancias. Estos hechos ocurrieron -según describe el requerimiento fiscal- respecto de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2006 a 2009.

Los hechos objeto de investigación fueron calificados como constitutivos del delito de "*asociación ilícita tributaria*" en los términos del artículo 15 -inc. c- Ley 24.769, respecto del universo de los imputados; aunque aclaramos que, la acusación, atribuye a Mariela Eva PETRACCA el carácter de organizadora de dichas maniobras, dado que de una u otra manera aparece involucrada en todas las usinas; mientras que, el resto de los imputados, habrían colaborado con ella a través de las diferentes usinas, aunque no entre sí.

Seguidamente, se declaró la clausura de la instrucción y se elevó la causa a juicio en fecha 17 de mayo de 2022 (fs. 4501); se radicó en este Tribunal en fecha 14 de junio

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

de 2022 (fs. 4656) y se dio vista a las partes en los términos del Artículo 346 del CPPN. La etapa de citación a juicio culminó el día 15 de febrero de 2023 (fs. 5154/5157).

**II.** En fecha 03 de septiembre de 2024 (fs. 5267) la Defensa Pública Oficial solicitó *"... se requiera a la A.F.I.P que inicie los procedimientos tendientes a determinar el perjuicio que se le habría ocasionado, a efecto de que mis asistidos puedan acogerse a la moratoria prevista en la Ley 27.743 ..."*.

Dicho pedido fue contestado por el organismo recaudador en fecha 27 de noviembre de 2024 (fs. 5302/5303). El Tribunal solicitó una ampliación del informe presentado.

En ese sentido, ARCA dio cumplimiento a la vista efectuada en fecha 05/02/2025 (fs. 5366/5369). En lo que aquí interesa, el organismo recaudador presentó un informe explicando la situación de cada una de las deudas determinadas y no determinadas, concluyendo -en función de los argumentos allí explicitados- que *"...Por lo expuesto, las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos evadidos por medio de la utilización de los comprobantes apócrifos emitidos por los sujetos aquí investigados se encuentran prescriptas..."*.

Dado el informe citado *ut supra*, se suspendió la audiencia prevista para el día 14 de febrero de 2025 y se dio nueva vista a las partes para que cada una se exprese según estimen corresponder (fs. 5370).

**III.A. La Defensa Pública Oficial** (el Dr. Pablo REPETTO en representación de Fernando BARTOLI, Marta GOMEZ, Carlos FIGUEROA, Héctor SAIZ y Juan SEPULVEDA; y el Dr. Lucas

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

OLLER, por la defensa de Daniel PONTET), se pronunció a fs. 5371/5379.

En síntesis, solicitaron la aplicación retroactiva de ley penal más benigna -Ley 27.743- y, en consecuencia, que se declare la extinción de la acción penal seguida contra sus asistidos respecto de los hechos que se les atribuyeran en la causa, calificados como *asociación ilícita fiscal* (art. 15 -inc. c- Ley 24.769) y se dicten sus sobreseimientos (art. 336 -inc. 1- CPPN, art. 5 de la Ley 27.743 y su Decreto Reglamentario 608/2024).

Expresaron que el Decreto 608/2024 PEN, que reglamenta la ley 27.743 (sancionada el 8/04/24), habilitó a las personas acusadas por el delito previsto en el art. 15 -inc. c- del Régimen Penal Tributario, a acogerse al Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, disponiendo en el tercer párrafo del artículo 5°, la extinción de pleno derecho de las acciones penales respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, lo cual opera directamente con la mayoría de las obligaciones tributarias y de modo indirecto respecto de las restantes obligaciones, cuya exigibilidad caducó a partir de su prescripción.

Agregaron que ARCA -en carácter de Querellante- informó que, en consecuencia de los hechos investigados en la presente, no existe en la actualidad ninguna obligación tributaria pendiente, ya sea por haber sido canceladas o por encontrarse prescriptas, por lo que consideran que corresponde la aplicación extensiva de la Ley 27.743 por el *principio de retroactividad de ley penal más benigna*, ya que sus efectos operan de pleno derecho.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

En sustento, manifestaron que: "...En lo que aquí interesa, la Ley 27.743, publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio del 2024, contempla en su Título I un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales mediante su pago al contado o en cuotas en los términos y bajo las modalidades y condiciones que la propia legislación prevé...".

Agregaron que el acogimiento a dicho régimen conlleva, por una parte, la suspensión de la acción penal correspondiente a los delitos que tuvieran por objeto las obligaciones regularizadas y, por otro lado, que la cancelación total de la deuda -en las condiciones previstas por la ley-, produce la extinción de la acción penal correspondiente a los delitos que tengan por objeto las obligaciones canceladas.

También mencionaron que el artículo 5° -tercer párrafo-, establece la extinción de la acción penal respecto de las obligaciones que hubieran sido canceladas íntegramente antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.743; así como, que la citada norma fue reglamentada mediante Decreto 608/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, cuyo artículo 1 establece que "...La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX y sus modificatorias, si dichas imputaciones se

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

*vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad...".*

Explicaron que la ley incluyó específicamente el delito de *asociación ilícita fiscal* -entre otros- como un delito susceptible de extinción de la acción penal, lo que fue reconocido por la Querella en su respuesta del pasado mes de noviembre del año 2024; en tanto, al momento de responder a una presentación del Dr. URRÁ, indicó que: *"...el perjuicio que pudiera resultar de la actividad criminal llevada a cabo por la asociación ilícita no resultaba un elemento del tipo penal que debiera ser investigado y no obtuvo importancia hasta la entrada en vigencia del Decreto N° 608/2024 en fecha 11 de julio del corriente año que en su artículo 1° otorga la posibilidad de que la acción penal del delito previsto en el art. 15 inciso c) del Régimen Penal Tributario, pudiera ser extinguida y/o suspendida conforme el art. 5° de la Ley 27.743, en el caso de que: "[...] si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad".*

En resumida cuenta consideran que los artículos señalados coinciden con lo establecido en los anteriores regímenes de moratoria y blanqueo establecidos en nuestro país, siendo que la novedad surge cuando el decreto reglamentario en forma expresa hace mención, en su artículo 1° y para el Régimen de Regularización, a la asociación ilícita fiscal, al especificar el catálogo de delitos susceptibles de extinción de la acción penal.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

**III.B.** El día 17/02/2025 (fs. 5381/5386), el **Dr. Horacio Javier CAFFARATTI**, por la defensa de Álvaro FLORES RIVAS y de Jorge Daniel FLORES MUÑOZ, expuso que "...surge evidente que han sido INCLUIDAS EN LOS BENEFICIOS DE LA LEY 27.743 y su Decreto Reglamentario N° 608/2024 las obligaciones fiscales objeto del legajo. Ello así, puesto que han sido canceladas con anterioridad a la Ley bajo examen o las mismas no resultan exigibles por haber prescripto. En tales condiciones, solicito su aplicación al caso de marras en lo que respecta a mis asistidos y proceda S.E. a declarar conforme a derecho EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL imputada a los Sres. Álvaro Flores Rivas y Jorge Daniel Flores Muñoz...".

**III.C.** El día 26/2/2025 (fs. 5389/5398) la **Dra. Lidia Patricia ESPECHE**, por la defensa de Juan Agustín CARUS y de Carlos Alberto CARUS, contestó la vista conferida. En lo que aquí interesa, en el punto 3 de su escrito, expresó que "...a) **La extinción de la acción penal:** vinculada a la determinación y exigencia de pago de los "impuestos evadidos" por medio de utilización de comprobantes apócrifos en relación a la aplicación de la Ley 27.743 del 27/06/2024 - Promulgada el 08/07/2024 y Publicada en el B.O. de fecha 08/07/2024; cuando NO existen deudas exigibles a mis asistidos como contribuyentes ni como socios en Neuquén Sport Group SRL ni como apoderado personal de Álvaro Flores Rivas en su condición de titular de EL MOLINO SRL.- 6 b) El propio texto de la referida Ley en sus arts. 3° y 5° dan la respuesta razonable y ajustada en derecho a la aplicación de la Prescripción.- c) A su vez el Decreto Reglamentario

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

608/2024 PEN en su art. 1°; sostiene la cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumeradas en los arts. 8°, 9°, 10° y 15° inc. c) del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad. d) De lo que surge: han sido INCLUIDAS EN LOS BENEFICIOS DE LA LEY 27.743 y Dicho Decreto n° 608/2024; las obligaciones fiscales que se investigan en el presente Legajo sin Juicio ni obviamente sentencia...".

**III.D.** El **Dr. Omar Nahuel URRÁ** (por la defensa de Mariela Eva PETRACCA y de Gabriela Romina PETRACCA), por su parte (fs. 5409/5418 y fs. 5406/5408), formuló planteos heterogéneos. En uno, abarcó desde la invocación de afecciones de salud de una de sus asistidas y la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, hasta la pretensión de que su escrito sea considerado un acto interruptivo de la prescripción; mientras que, en otro, en lo que específicamente atañe al objeto de la vista, el Dr. URRÁ ensayó una serie de objeciones respecto del informe de fs. 5366/5369, al que calificó de falaz e incompleto, sin que de su desarrollo pudiera extraerse con claridad cuál sería la inexactitud concreta ni cómo impactaría ello en el fondo del asunto en trato.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

Finalmente, concluyó con un pedido de sobreseimiento de sus defendidas, cuya fundamentación, más que ambigua, resulta de difícil aprehensión, toda vez que se entrelazan en su exposición elementos fácticos, valoraciones generales sobre la administración de justicia y referencias normativas que, en última instancia, no guardan relación evidente con la cuestión a resolver.

**III.E.** Los **Dres. Rubén Walter BARTOLATTO** (por la defensa de Guillermo Leonardo SCHEUERMANN) y **Juan Carlos CIALCETTA** (por la defensa de Rodrigo Horacio IGEA) no se presentaron a contestar la vista.

**IV.** A su turno, la parte querellante contestó la vista luego de que las defensas expusieran sus posturas (fs. 5436/5439). Realizó un pormenorizado análisis del marco normativo aplicable al caso en pesquisa. Sostuvo que "...en razón de la entrada en vigencia de la Ley 27.743 y la Resolución General N° 5525/2024 -AFIP- (Cfr. art. 17 Título I de la citada Ley), se encuentra vigente un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, que consagra una renuncia circunstancial del Estado en su potestad penal, y a los fines de coadyuvar con el logro de tan elevado fin, esta Administración Federal de Ingresos Públicos, se pone a disposición a efectos de colaborar con la finalidad que imprime la mencionada Ley (...) En relación al delito que aquí se investiga, el Decreto 608/2024 en su art. 1° aclara: "La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación-

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

*respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad. Es decir, mediante la reglamentación se aclaró la posibilidad de que los sujetos acusados por el delito procesado y elevado a juicio en las presentes actuaciones, puedan atenerse a los beneficios que la moratoria otorga al universo de contribuyentes en general. De lo que se trata, a nuestro entender, es que la amnistía extingue las consecuencias penales del hecho -v.gr. evasión-, por lo que ese hecho no podría ser ya considerado no solo para su propio juzgamiento penal sino ni siguiera como prueba o resultado de otro delito, como el de "asociación ilícita tributaria", pues cuanto menos a los efectos penales, el hecho amnistiado no se tiene por ilícito. En dicha tesitura y tomando en consideración la finalidad del nuevo Código Procesal Penal Federal le imprime al proceso, entendido como una "vía para resolución del conflicto" y "restablecimiento de la armonía", la operatividad de la Ley 27.743, resulta en los términos del art. 22 del CPPF, la solución que mejor se adecúa, respecto de los delitos de competencia originaria de este Organismo Fiscal."*

**V.** Por último dictaminó el Ministerio Público Fiscal a fs. 5452/5452.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

En primer lugar, hizo un resumen de la situación procesal del legajo, destacando las piezas procesales más importantes; así como, consideró y resumió los dictámenes previos de las restantes partes en relación con la cuestión en trato para luego pasar a dictaminar (Punto III).

En este sentido expresó -en síntesis- que "...destaco en primer lugar que, tal como surge del informe presentado por la ARCA obrante a fojas 5366/9, respecto de los perjuicios patrimoniales que se lograron determinar, la gran mayoría de las boletas de deuda que a ellos correspondían se encontraban canceladas previamente a la vigencia de la Ley 27.743, prescriptas, "descargadas por incobrabilidad provisoria", o bien "descargadas por escasa entidad económica" o por "pérdida del interés fiscal". Por otro lado, el organismo recaudador explicó, "se encuentran prescriptas" las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos evadidos por medio de la utilización de los comprobantes apócrifos emitidos por los sujetos aquí investigados -el resaltado me pertenece- Al ponderar en conjunto la totalidad de las conclusiones que arrojó la ARCA en este último devenir de la causa, surge que hay un universo del perjuicio fiscal que se encuentra cancelado o prescripto mientras que otra parte de tal perjuicio si bien se encuentra indeterminado -y en consecuencia impago- lo cierto es que las acciones que a su respecto se podrían iniciar ya prescribieron. Ante tal escenario, es necesario hacer hincapié en que actualmente este Ministerio Público Fiscal tiene dos nuevos ejes o principios de actuación impuestos por la ley: el de

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

*objetividad y el de gestión de conflictos, principios con mayor centralidad ante la puesta en marcha del sistema acusatorio-adversarial en la jurisdicción General Roca y Neuquén (...) En tal sentido, y tal como esgrimió la querella, la amnistía extingue las consecuencias penales del hecho, razón por la cual, no solo no podría ser juzgado penalmente sino tampoco utilizado como prueba de otro delito, como en este caso, el de asociación ilícita tributaria, toda vez que el hecho amnistiado no se tiene por ilícito. Sumado a ello, no puedo dejar de valorar el tiempo que ha insumido la tramitación de la presente causa, no atribuibles a las personas imputadas, cuestión que vistas las recientes reformas en materia tributaria, han afectado indefectiblemente el destino del legajo. Ante este panorama, si bien es cierto que hay un eventual perjuicio patrimonial que no se logró determinar, al estar de todos modos las acciones que respecto a él podrían articularse ya prescriptas, visto de modo integral el conjunto de conductas, resulta improcedente su reproche. Por otro lado, dado que las restantes boletas de deuda que formaron parte del perjuicio patrimonial que sí se pudo determinar ya fue cancelado y/o se encuentra prescripto -todo ello con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27.743 y su Decreto Reglamentario 608/2024- entiendo que es aplicable a la totalidad de personas aquí imputadas los beneficios previstos en tal normativa...".*

**VI)** Así las cosas, habiendo escuchado a las partes y entrando a resolver los planteos en trato diremos;

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

## **FUNDAMENTOS:**

**Los Sres. Jueces; Dr. Alejandro CABRAL y Dr. Alejandro SILVA dijeron:**

I. En primer lugar, debemos mencionar que la plataforma fáctica por la que las personas imputadas fueron requeridas fue reseñada en el punto I de los considerandos, por lo que, a los fines de no realizar reiteraciones innecesarias nos remitimos a ellas, acotando, sólo, que los hechos aquí pesquisados fueron determinados entre los años 2006 y 2009.

Aclarado cuanto precede, debemos decir que todas las partes, en sus respectivos dictámenes, han dado acabado fundamentado de sus posiciones y, a su vez, explicado por qué entienden que la ley 27.743 (y su respectivo decreto reglamentario) es aplicable al presente caso; por lo que no existe controversia en tal sentido.

Así las cosas, amerita consignar que la Ley 27.743, publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio del 2024, contempla en su Título I un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales mediante su pago al contado o en cuotas en los términos y bajo las modalidades y condiciones que la propia legislación prevé.

Establece, por un lado, que el acogimiento a dicho régimen produce la suspensión de la acción penal correspondiente a los delitos que tuvieran por objeto las obligaciones regularizadas; y, por otro lado, que la cancelación total de la deuda –en las condiciones previstas por la ley– extingue la acción penal correspondiente a los delitos que tengan por objeto las obligaciones canceladas. A su vez, establece que la cancelación total conlleva consecuentemente la extinción de la acción en relación a las

---

*Fecha de firma: 29/04/2025*

*Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA*



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

obligaciones que hubieran sido canceladas antes de la entrada en vigencia de la Ley en las que se hubiera iniciado la acción penal pero no hubiera -hasta el momento de la sanción de la ley- sentencia (Art. 5).

Ahora bien, la citada norma fue reglamentada mediante el Decreto N° 608/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, cuyo art. 1 establece: "*... La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad ...*". Es decir, incluyó específicamente el delito de asociación ilícita fiscal como un delito susceptible de extinción de la acción penal siempre y cuando se cumplan los parámetros expuestos anteriormente.

Más allá de la opinión que cada uno pueda tener respecto a la conveniencia del decreto, lo cierto es que el principio de legalidad exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político-criminal que caracteriza al derecho penal como la *última ratio* del ordenamiento jurídico, y con el principio *pro homine* que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

De tal modo, por fuera de cualquier apreciación personal respecto de la técnica legislativa empleada o del fondo del asunto en cuestión, es claro que el principio de división de poderes encarga al Poder Judicial la interpretación y aplicación de las normas y no su valoración de conveniencia.

Por ello, en base a una interpretación literal, integral y sistemática de la norma, cabe concluir que la liberación prevista en la Ley 27.743 -y su reglamento- incluyen expresamente al delito de *asociación ilícita fiscal* previsto en el art. 15 -inc. c- de la Ley 24.769 como delito típico plausible de adjudicarle el beneficio de la amnistía prevista en el nuevo marco normativo respecto a los delitos tributarios; siempre y cuando -claro está- se cumplan los requisitos para su procedencia.

Todas las partes se pronunciaron en el mismo sentido, coincidiendo en cuanto a que, la nueva normativa, expresamente reconoce al delito tributario aquí investigado como factible de acogerse a la amnistía en ella prevista.

**II.** Sentado cuanto precede, debemos decir que el principio de ley penal más benigna consagrado en el Art. 2 del Código Penal establece que *"...Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho..."*.

Así, el análisis respecto a la ley penal más benigna exige una comparación entre dos normas que se suceden en el

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

tiempo, que se debe realizar tomando la totalidad de sus contenidos y aplicar la que, comparativamente, beneficie al imputado en cuestión. La ley sancionada con posterioridad al hecho incriminado debe, en definitiva, aplicar un tratamiento más favorable al imputado, y, por lo tanto, debe ser aplicada íntegramente.

Por eso, lo esencial es prestar atención a los comportamientos que son objeto del enunciado legal, pues son los hechos típicos los que determinan la especial antijuridicidad penal en tanto concreción de un juicio de disvalor, que se verifica siempre en relación con normas de comportamiento que definen el marco de situación jurídica. Así, aislar un concepto o un término fuera de su inserción típica impide la interpretación correcta de la ley y torna inalcanzable la finalidad normativa.

Al respecto, la CSJN ha precisado *"...Que el principio de legalidad enunciado en el artículo 18 de la Constitución nacional establece que para que una persona pueda ser sometida a proceso, la conducta que se le imputa, así como la escala penal prevista para esa conducta, deben haber sido Individualizadas en una ley sancionada de manera previa a la comisión del hecho, sentando así el principio de irretroactividad de la ley penal, el que reconoce como única excepción la aplicación de la ley penal más benigna..."*.

A su vez, en la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna debe ponerse de relieve el sustento constitucional y convencional de dicho principio en nuestro sistema jurídico, por imperio de los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 de la

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Es decir, la regla es que la ley aplicable al caso siempre es la vigente al momento del hecho pesquisado, estableciendo como excepción al principio, que posteriormente se sancione una ley penal que favorezca en términos punitivos al imputado. Esto es así dado que, lo que en algún momento, contexto o circunstancia el Estado consideraba disvalioso, a posterior dejó de serlo, o bien, la rigurosidad con la que sancionaba la conducta en abstracto, dejó de ser tal.

No caben dudas entonces, que, en relación con los hechos investigados en el presente legajo, corresponde la aplicación de la ley 27.743 -y su reglamento- dado que (como bien expusieron todas las partes) son beneficiosas para todos los imputados del presente caso.

En este sentido, es sabido que las moratorias y blanqueos resultan ser un salvataje para los contribuyentes, con la condonación de una obligación tributaria y la consecuente inmunidad de enjuiciamiento penal; en términos jurídicos, se traduce en el *"... olvido de un hecho delictuoso para establecer la calma y la concordia social ..."*, *"... extingue la acción y la pena si antes hubiese sido impuesta y borra la criminalidad del hecho ..."* (CSJN, Fallo 178:377, entre otros).

Como expresó la Defensa Oficial, del debate parlamentario de la norma surge claramente lo que el legislador buscó con esta nueva amnistía. El **Sr. ATAUCHE** expresó *"(...) El proyecto propone la posibilidad de regularizar distintos tipos de deudas tributarias, aduaneras*

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

y de seguridad social por obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los contribuyentes que se adhieran a la moratoria pueden beneficiarse con descuentos en intereses resarcitorios y punitivos, que varían según la fecha en que se adhieran al régimen; condonación de multas e intereses; reducción de honorarios en deudas en discusión administrativa o judicial; la suspensión de acciones penales tributarias aduaneras, etcétera. El acogimiento al régimen produce la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción. **La cancelación total de la deuda produciría la extinción de la acción penal en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. También quedaría extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley en la medida en que no exista sentencia firme ..."** (Diario de sesiones 29/05/2024 - la negrita nos pertenece).

Por todo lo expuesto, dado que no existe controversia entre las partes respecto a la aplicación de la nueva moratoria fiscal vigente en la actualidad, corresponde al Tribunal analizar el estado de las deudas objeto del presunto ilícito.

Es así que, entonces, corresponde establecer si las deudas bajo investigación se encontraban canceladas o

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

prescriptas de modo previo a la sanción de la ley 27.743 y, a su vez, si no existe ninguna de las excepciones previstas en el Art. 4 de la mencionada ley.

**II.A.** Sentado cuanto precede, corresponde analizar entonces el caso particular en trato. Como dijimos primigeniamente, los hechos pesquisados en la presente investigación ocurrieron entre los años 2006 y 2009. Es decir, han pasado casi 20 años de los hechos investigados y esto merece ser tenido en consideración a la hora de analizar la aplicación de la normativa al hecho. No se puede soslayar que, dado el paso del tiempo, los ilícitos penales tipificados en la norma de aquel momento han sufrido alteraciones dado los cambios socio-políticos acaecidos durante todo ese tiempo.

Quedó evidenciado en el punto I de estos fundamentos que el Estado -a través de la ley 27.743- renunció a su poder punitivo y habilitó a las personas acusadas del delito de asociación fiscal ilícita, sin condena firme, a acogerse al régimen de cancelación de las obligaciones tributarias pendientes previsto en la ley, disponiendo expresamente la extinción de la acción penal para aquellas deudas canceladas previo a su dictado, lo que también cabe extenderse, efectuando una interpretación armónica de lo reglado por dicha ley, a las obligaciones no exigibles por haber prescripto (art. 3 inc. B ley 27.743).

En lo que respecta a la indeterminación de perjuicio por la inacción del Estado en fiscalizar e impugnar las declaraciones juradas de los contribuyentes usuarios de facturación espuria, ello no puede ser analizado en detrimento de la aplicabilidad del instituto de amnistía en claro perjuicio contra aquellos hechos sobre los cuales el





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

Estado realizó una determinación tributaria e incluso una posible denuncia por evasión fiscal.

**II.B.** Debemos aclarar también que, si bien la normativa analizada habla de "*cancelación previa*" a la vigencia de la ley 27.743, lo cierto es que realizando una interpretación *pro homine*, la prescripción o inexigibilidad de la deuda (sea por pérdida de interés fiscal o incobrabilidad) causa los mismos efectos que la cancelación. Esto es así dado que, si se realiza una interpretación armónica de la norma, en tanto y en cuanto la exigibilidad de la deuda no resulta jurídicamente posible, la extinción de la acción debe proceder de igual forma, equiparando dichos supuestos al de la "*cancelación*".

Actuar de manera contraria y diferenciar deudas canceladas de las prescriptas o de aquellas que perdieron interés fiscal (sea por el motivo que sea), produciría distinciones entre aquellos que cancelaron y aquellos a los que no se les puede exigir la deuda sin argumento o condición válida que distinga uno de otros, toda vez que sea por cancelación, prescripción o pérdida de interés fiscal, esa deuda no resulta exigible.

Ahora bien, en relación a los procesos de ejecución fiscal que interrumpieron el curso normal de la prescripción (detallados en el informe elevado por el organismo recaudador), cabe destacar que el derecho del vencedor en un juicio para obtener la ejecución de la sentencia está sujeto a un nuevo plazo de prescripción. Analizando la situación de cada expediente en esa situación, el legajo se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia y, en este caso, la prescripción opuesta después de dictada la sentencia de trance y remate es de cinco (5) años, conforme el Código

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

Civil y Comercial vigente, entendiéndose que el derecho ya juzgado no es imprescriptible, pero al no haber establecido la ley un plazo especial de prescripción, es la común u ordinaria.

En otras palabras, a partir de la notificación de la sentencia de trance y remate la parte querellante estaba en condiciones de hacer efectivo su derecho, sin que sea posible pretender que la acción se tornara virtualmente imprescriptible frente a su inactividad y en beneficio propio. (Véase CREDILOGROS C.F.S.A. c/ Cano, Juan Eusebio s/ Ejecutivo SENTENCIA 27 de Agosto de 2018 Nro. Interno: 5.789 Tribunal origen: Juzgado de Paz Letrado de Chimbas Protocolo de Autos Tomo 99, Folios 116/121. CAMARA DE PAZ LETRADA. SAN JUAN, SAN JUAN Magistrados: Romero, Juan Luis Tonelli, María Esthela Id SAIJ: FA18280057).

En tal orden de ideas, computado el plazo de prescripción liberatoria ordinario de las sentencias de ejecución fiscal detalladas en el informe de perjuicio fiscal remitido por el Órgano Recaudador, surge que todas las ejecuciones poseen sentencias que superan ampliamente el plazo citado, por lo cual se encuentran en análoga situación que aquellas obligaciones que nunca fueron ejecutadas por el Fisco.

Aclarado esto, debemos resaltar que en el escrito presentado por ARCA -fs. 5366/5369- se hizo la distinción respecto a las deudas determinadas y las indeterminadas, por lo que corresponde analizar la situación de a cada una de ellas.

**III.A.** En relación con las deudas determinadas, se observa en el cuadro acompañado por el organismo recaudador, que las deudas contraídas por las empresas que presuntamente





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

habrían utilizado las facturas apócrifas brindadas por la asociación bajo pesquisa se encuentran prescriptas (en función de lo expuesto en el considerando II.B), canceladas previamente a la ley 27.743 o bien -si su prescripción fue interrumpida-, su cobro ha perdido interés fiscal -por alguno de los diferentes motivos expuestos en el cuadro de referencia- restando sólo el acto administrativo interno de ARCA que dicte su prescripción.

En este sentido, es claro que la exigibilidad de las deudas determinadas por el organismo recaudador ha perdido la acción o bien no tiene interés en exigir la cancelación de las deudas producto de esta investigación. No existe controversia en este sentido dado que la misma querella lo expresó en su respectivo dictamen, más precisamente en el cuadro de deudas determinadas, que acompañó en su presentación.

Así las cosas, y en consecuencia con todo lo expresado precedentemente, corresponde declarar extinguida la acción respecto de las deudas determinadas, y dictar el sobreseimiento de los imputados por dichas deudas por haber sido canceladas de manera previa a la sanción de la ley 27.743 (art. 5).

**III.B.** Ahora bien, en relación a las deudas indeterminadas, ARCA ha sido muy claro al expresar que "... los periodos fiscales en los cuales operaron las usinas de facturación apócrifa abarcaron desde el 2005 al 2009. Conforme el artículo 56 de la Ley N.º 11.683 (texto vigente según Ley N.º 27.430/2017) establece con carácter general que: "Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley,

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. b) Por el transcurso de DIEZ (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos. c) Por el transcurso de CINCO (5) años, respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos. La acción de repetición de impuestos prescribe por el transcurso de CINCO (5) años. Prescribirán a los CINCO (5) años las acciones para exigir, el recupero o devolución de impuestos. El término se contará a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha desde la cual sea procedente dicho reintegro. La prescripción de las acciones y poderes del Fisco en relación con el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los agentes de retención y percepción es de CINCO (5) años, contados a partir del 1° de enero siguiente al año en que ellas debieron cumplirse. Igual plazo de CINCO (5) años rige para aplicar y hacer efectivas las sanciones respectivas". Las causales de suspensión e interrupción de la prescripción se encuentran enunciadas en los siguientes artículos 65 y siguientes de la Ley N.° 11.683. **Considerando lo expuesto, partiendo del ejercicio fiscal más antiguo que podríamos considerar Diciembre/2009. Contando desde ese**

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493





Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

**plazo, es evidente que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos evadidos por medios de la utilización de los comprobantes apócrifos emitidos por los sujetos aquí investigados se encuentran prescriptas ..."** (fs. 5366/5369 - la negrita nos pertenece).

Lo expuesto no requiere mayor análisis y no caben dudas -ni existe controversia- acerca de que las deudas indeterminadas en el presente legajo, contando el plazo de inicio de la prescripción, resultan efectivamente prescriptas, por lo que también corresponde la declaración de la extinción penal respecto de ellas.

**III.C.** Debemos mencionar, por último, en relación con los requisitos para la procedencia de la amnistía, que las partes acusadoras no han vertido oposición alguna ni esgrimido que se encuentren presentes alguno de las excepciones estipuladas en el Art. 4 de la Ley 27.743. Es decir, no han sido declarados en quiebra, no poseen antecedentes, ni tienen procesos abiertos vinculados a delitos tributarios o relacionados a ellos (ver informes de RNR - Fecha 26 y 28 de abril de 2025) por lo que la amnistía resulta procedente.

**IV.A.** Así las cosas, es claro que, concurren los requisitos para que los imputados se acojan a la moratoria prevista en la nueva ley y, por lo tanto, corresponde declarar extinguida la acción (que opera de pleno derecho) respecto a los imputados, por aplicación de la ley 27.743.

Debemos destacar que esta solución no solo se corresponde por la novedad suscitada a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.743, sino también, porque no existe controversia en su aplicación. Las partes acusadoras han

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

desistido tácitamente de la acción penal toda vez que entienden que no pueden sostener -a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley-, la acción penal.

La querella, al contestar la vista refirió muy claramente que "...mediante la reglamentación [de la ley 27.743] se aclaró la posibilidad de que los sujetos acusados por el delito procesado y elevado a juicio en las presentes actuaciones, puedan atenerse a los beneficios que la moratoria otorga al universo de contribuyentes en general. De lo que se trata, a nuestro entender, es que la amnistía extingue las consecuencias penales del hecho -v.gr. evasión-, por lo que ese hecho no podría ser ya considerado no solo para su propio juzgamiento penal sino ni siguiera como prueba o resultado de otro delito, como el de "asociación ilícita tributaria", **pues cuanto menos a los efectos penales, el hecho amnistiado no se tiene por ilícito.** En dicha tesitura y tomando en consideración la finalidad del nuevo Código Procesal Penal Federal le imprime al proceso, entendido como una "vía para resolución del conflicto" y "restablecimiento de la armonía", la operatividad de la Ley 27.743, resulta en los términos del art. 22 del CPPF, la solución que mejor se adecúa, respecto de los delitos de competencia originaria de este Organismo Fiscal ...". (fs. 5436/5439 - la negrita nos pertenece).

En igual sentido se pronunció el Ministerio Público Fiscal cuando expresó que "... **Tal como esgrimió la querella, la amnistía extingue las consecuencias penales del hecho, razón por la cual, no solo no podría ser juzgado penalmente sino tampoco utilizado como prueba de otro delito, como en**





Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

*este caso, el de asociación ilícita tributaria, toda vez que el hecho amnistiado no se tiene por ilícito. Sumado a ello, no puedo dejar de valorar el tiempo que ha insumido la tramitación de la presente causa, no atribuibles a las personas imputadas, cuestión que vistas las recientes reformas en materia tributaria, han afectado indefectiblemente el destino del legajo. Ante este panorama, si bien es cierto que hay un eventual perjuicio patrimonial que no se logró determinar, al estar de todos modos las acciones que respecto a él podrían articularse ya prescriptas, visto de modo integral el conjunto de conductas, resulta improcedente su reproche. Por otro lado, dado que las restantes boletas de deuda que formaron parte del perjuicio patrimonial que sí se pudo determinar ya fue cancelado y/o se encuentra prescripto -todo ello con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27.743 y su Decreto Reglamentario 608/2024- entiendo que es aplicable a la totalidad de personas aquí imputadas los beneficios previstos en tal normativa...". (fs. 5452/5452 - la negrita nos pertenece).*

En este sentido, en función de los principios que rigen el sistema acusatorio, como lo son los de la bilateralidad y la contradicción, si las partes -tanto acusadoras como defensas- no presentan controversia en relación a la aplicación de la norma, a los jueces no nos queda más que analizar la procedencia, razonabilidad y logicidad de las posturas. Actuar en contrario sería resolver extra petita lo cual no es permitido en el sistema actual.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

Por todo lo expuesto, entendiendo que las presentaciones de las partes se encuentran acabadamente fundadas, procede que el Tribunal dicte la amnistía que la norma prevé y, en consecuencia, declare extinguida la acción penal (tal como lo establece la ley 27.743) respecto a los hechos por los que los imputados fueron requeridos a juicio, en tanto resulta evidente que el Estado renunció a una cuota de su poder punitivo y habilitó a las personas acusadas del delito de asociación fiscal ilícita -sin condena firme-, a acogerse al régimen de cancelación de las obligaciones tributarias pendientes previsto en la mentada ley, incluyendo allí de manera tácita a aquellas que ya no fueran exigibles.

En consecuencia de todo lo expuesto, dado que la ley 27.743 dispone expresamente la extinción de la acción penal de oficio para aquellas deudas ya canceladas previo a su dictado, lo que también cabe extenderse (efectuando una interpretación armónica de lo reglado por dicha ley y por el principio *pro homine*) para las obligaciones no exigibles (ya sea por prescripción o por pérdida de interés fiscal), es que corresponde declarar extinguida la acción penal y DECLARAR el sobreseimiento de los imputados por falta de acción penal en función de lo normado en la ley 27.743 (artículos N° 3, 4 y 5) y su decreto reglamentario N° 608/24 (artículo N° 1).

Tal es nuestro voto.

**El Sr. Juez Simón Pedro Bracco dijo:**

Voy a adherir a la solución propuesta en el voto que antecede, en el entendimiento de que no media controversia entre las partes en relación con la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 27.743 y del Decreto 608/2024

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

-reglamentario de aquélla-, de que el delito atribuido a los imputados -artículo 15 inciso C de la ley 24.769-, se encuentra alcanzado por la amnistía prevista en esa norma y, finalmente, respecto a que se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia de ese instituto en relación a la totalidad de los imputados.

En esas condiciones, y tal como se ha plasmado en el voto que antecede, la postura de las partes se encuentra debidamente fundada y supera el control de logicidad y fundamentación al que debe ser sometida (artículo 69 y 123 del Código Procesal Penal de la nación), y, en consecuencia, corresponde resolver en el sentido por ellas propuesto, con independencia de la opinión que como juzgadores pudiéramos tener sobre el fondo del asunto.

Al respecto, se ha dicho que no puede soslayarse el límite que establece el principio de bilateralidad, según el cual *"la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal"* (del voto de los Jueces Zaffaroni y Lorenzetti, in re "Amodio, Héctor L." de la C.S.J.N., rta. el 12/06/2007).

Como corolario de lo expuesto, adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede, en cuanto propicia la extinción de la acción y el dictado del sobreseimiento de la totalidad de los imputados, sin costas.

Tal es mi voto.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493

Por todo lo expuesto, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Neuquén, por unanimidad,

**RESUELVE:**

**I.- DECLARAR la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL** en esta causa caratulada "**PETRACCA, Mariela Eva - PETRACCA, Gabriela Romina - CARUS, Agustín Juan - CARUS, Carlos Alberto - FLORES RIVAS, Álvaro Ramón y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal**" (Expte. N° FGR 17562/2013/TO1) por la aplicación de la ley 27.743 -artículos 3, 4 y 5-, su decreto reglamentario N° 608/24 -Art. 1-, artículo. 2 del Código Penal y arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

**II.- DECLARAR EL SOBRESEIMIENTO de Mariela Eva PETRACCA** -DNI 27.038.444-; **Gabriela Romina PETRACCA** -DNI 31.614.694-; **Fernando BARTOLI** DNI 27.725.259; **Marta Silvia GÓMEZ**, DNI 14.761.202; **Rodrigo Horacio IGEA**, DNI 25.285.801; **Carlos Martín FIGUEROA**, DNI 27.377.321; **Guillermo Leonardo SCHEUERMANN**, DNI 23.001.693; **Juan Agustín CARUS**, DNI 30.812.862; **Álvaro Ramón FLORES RIVAS**, DNI 93.018.473; **Jorge Daniel FLORES MUÑOZ**, DNI 92.970.513; **Carlos Alberto CARUS**, DNI 32.000.187; **Daniel Orlando PONTET**, DNI 16.052.147; **Héctor SAIZ**, DNI 11.861.886 y **Juan Antonio SEPÚLVEDA**, DNI 20.242.679; en función de lo resuelto en el acápite anterior, en relación a los hechos que se les atribuye en la presente causa, calificado legalmente como Asociación Ilícita Fiscal, en calidad de coautores (art. 15 -inc. c- Ley 24.769 y art. 45, CP, arts. 334 y 336 -inc. 1- CPPN - ley 27.743 -artículos 3, 4 y 5-, su decreto reglamentario N° 608/24 -Art. 1), dejando expresa mención y constancia de que la formación del presente legajo no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado, sin costas.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN

**III.- REGISTRAR** con el N° /2025 de sentencias de este Tribunal, realizar las comunicaciones de estilo y NOTIFICAR.

Ante mí.

---

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: ALEJANDRO ADRIAN SILVA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SIMON PEDRO BRACCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO CABRAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VICTOR CERRUTI, SECRETARIO DE CAMARA



#36685113#453322334#20250428120825493